

¿Buen gobierno o gobernanza?

El pasado martes 2 de febrero tuve el privilegio de asistir a una más de las sesiones del Seminario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas que El Colegio de la Frontera Norte celebra en su sede de la ciudad de México. La sesión fue ocasión propicia para reunir en una sola mesa las opiniones de muy destacados académicos y servidores públicos de alto nivel que, en conjunto, ofrecieron una perspectiva trascendente sobre el estado que guardan los asuntos públicos de nuestro país.

Las opiniones más destacadas provinieron de las conferencias magistrales que impartieron, por un lado, Luis F. Aguilar Villanueva, sin duda alguna el principal y más destacado intelectual latinoamericano y de México en asuntos de gobernanza y políticas públicas, y, por el otro, Gladys López Acevedo, del Banco Mundial. También destaca lo dicho por Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y por Tonatiuh Guillén López, presidente del Colef y anfitrión de la reunión. Del significativo cúmulo de conclusiones que arrojó el seminario, considero relevante extraer una sola que está resultando particularmente esclarecedora de la situación política que vive el país en estos mismos momentos. Me refiero a la idea planteada desde las conferencias iniciales, y luego desagregada por el resto de las ponencias, respecto a la pertinencia de que el país transite ya hacia un modelo de gobernanza plena, en el que los ciudadanos y sus organizaciones ocupen un lugar central, y deje atrás los intentos fallidos por conducir los asuntos públicos desde visiones individualistas o de grupo.

El planteamiento resulta útil y necesario desde casi cualquier punto de vista, pues a la luz de las acciones y eventos más recientes es difícil no simpatizar con la idea de que políticos, líderes partidistas y funcionarios de gobierno dejen de pensar en sus muy limitados intereses y agendas, para centrar su atención en la solución efectiva de los problemas y necesidades nacionales. Analicemos algunos ejemplos para ilustrar lo antes dicho.

Los trágicos eventos de la semana anterior no sólo acabaron con la vida de jóvenes y arrasaron con la vivienda de muchas familias. La violencia en Ciudad Juárez y el desbordamiento de ríos agitaron y revolvieron también los intereses y las posiciones de una buena parte de lo que llamamos nuestra clase política. El resultado de esta sacudida fue la concreción de acuerdos y actuaciones públicas dominadas, nuevamente, por el oportunismo, por un supuesto pragmatismo electoral, y por el deseo de mostrarse responsables y reactivos.

No pueden ser llamadas de otra manera las reacciones

de funcionarios como el propio presidente Calderón quien, desde Suiza —y obviando la necesaria prudencia comunicativa que todo jefe de Estado debe tener cuando se encuentra fuera de su país—, pretendió con ocurrencias discursivas y frases grandilocuentes mostrarse atento y cercano a lo que ocurría en el territorio nacional. Lo mismo puede decirse de Herr Gómez Mont, de la SG, y del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, para quienes la sola manifestación de su voluntad política debe ser considerada acción suficiente para comenzar a resolver los graves problemas que se viven en la frontera norte.

Se añaden a la lista de comportamientos oportunistas las alianzas electorales contra-natura que han concretado el PAN y el PRD en Hidalgo y Durango, bajo la sola idea de ganar las elecciones a gobernador, y sin que aún pueda entenderse el programa de gobierno que aplicarían tales alianzas. Está, finalmente, la indiferencia de las autoridades federales ante las persistentes denuncias de corrupción e incompetencia administrativa motivadas por

un evidente tráfico de influencias en torno a la familia presidencial y por el subejercicio en prácticamente todas las dependencias y programas federales.

Del panorama anterior resulta, entonces, una necesaria reflexión en la que cada ciudadano debemos responder con convicción a la pregunta ¿cuáles son los intereses que verdaderamente esperamos que nuestros gobiernos e instituciones atiendan? No es una respuesta sencilla, dada la diversidad de propósitos y necesidades que la población de un país tan complejo como México puede llegar a tener. No obstante, en lo que sí podemos estar de acuerdo es en la pertinencia de que lo que los dirigentes políticos y sociales hagan sea producto de un diálogo permanente e irrenunciable entre gobernantes y gobernados.

Luego entonces, lo que el país requiere es superar la limitada visión que la administración calderonista tiene de su responsabilidad y que, absurda y pomposamente, llama una estrategia "Para vivir mejor". Se requiere entender, a cabalidad, que el buen gobierno pasa indefectiblemente por adaptar las respuestas públicas a las opiniones ciudadanas, mediante un ejercicio de síntesis y no uno interpretativo, como parece ser la intención velada de Felipe Calderón en sus 10 puntos para la reforma política. Es decir, no hay que modificar las instituciones para que las camarillas y los partidos puedan seguir teniendo acceso irrestricto a las posiciones de poder. Por el contrario, lo que es debido es asegurarse que cualquiera que ocupe un cargo público cumpla con las funciones que tiene encomendadas, aplicando los recursos de autoridad y generando apoyo social. Así de simple y así de grave.



José Sosa

ppsosa@hotmail.com

